

de condena de ejecución condicional, es uno de los antecedentes de la Suspensión del Proceso a Prueba.-

La suspensión condicional de la pena como forma simple, es decir, sin la vigilancia característica de la probation, se instaura en el continente europeo a partir de las leyes belga (1888) y francesa (1891)³⁸ y se introduce en otras legislaciones a partir de las recomendaciones que al respecto ofrece la Unión Internacional de Derecho Penal.³⁹

Según el autor, Henry Issa El Khoury, esta figura de la ejecución condicional de la pena es:

*“ (...) un beneficio que otorgan los jueces en sentencia, en aquellos casos de sujetos primarios cuya pena no sea mayor de 3 años. Se le concede la posibilidad de no ir a la prisión si durante el término de tres a cinco años cumplen las condiciones impuestas por el juez. ... ”.*⁴⁰

³⁸ “ ... La primera ley de condena condicional se sanciona en Bélgica en 1888, y esta ley sirvió de modelo a la ley Belager francesa de 1891, según los cuales se consideraba al principio esta medida como un favor otorgado al delincuente que poseyera buenos antecedentes y pudiera alegar ciertas circunstancias especiales. ...”. José Rico citado por FERNÁNDEZ QUESADA, Lorena María, “Alternativas a la Pena de Prisión”, Tesis para obtener el Grado de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, San José, Costa Rica, 1994, p. 18.-

³⁹ MAQUEDA ABREU, María Luisa, Ibid., p. 36.-

⁴⁰ A.A.V.V., “A la Armonía por la Palabra: La Solución Negociada de Conflictos Penales”, Convenio Corte-AID, San José, Costa Rica, p. 43.-

Al igual que con la probation, la suspensión condicional de la pena y la Suspensión del Procedimiento a Prueba se diferencian en el momento de su aprobación, aquella se establece una vez que se ha pronunciado una sentencia, con lo que se pretende que la pena no se ejecute en el tanto el condenado cumpla las condiciones impuestas por el Tribunal; mientras que la Suspensión del Proceso se solicita y aprueba en una fase intermedia, es decir, no hay necesidad de llevar a cabo el debate y dictar sentencia si el imputado cumple satisfactoriamente las condiciones durante el plazo de prueba impuesto.-

La Suspensión del Proceso a Prueba y el beneficio de ejecución condicional de la pena tienen una relación íntima en el proceso penal de adultos y menores, en el tanto la segunda figura es presupuesto de la primera. Esta última se otorga en aquellos casos en que proceda la suspensión condicional de la pena, y esto implica una economía de recursos amplia, porque no será necesario la realización del juicio.⁴¹

Luego de esbozarse los antecedentes del Instituto en estudio, procede definirlo.-

A.2. Concepto y naturaleza jurídica:

El instituto de la Suspensión del Proceso a Prueba, tiene diferentes denominaciones, según se

⁴¹ HOUED VEGA, Mario, “Suspensión del Proceso a Prueba”, Ibid., p. 147.-

refiera a una legislación u otra. Por ejemplo en Argentina se denomina Suspensión del Juicio a Prueba;⁴² en Portugal se conoce como Arquivamento contra Injunções o Regras de Conduta;⁴³ en Alemania el párrafo 153a de la Ley Procesal Penal Alemana describe el Archivo del Proceso en Caso de Cumplimiento de Condiciones y Mandato;⁴⁴ en Panamá se denomina Suspensión Condicional del Proceso;⁴⁵ y en Polonia se le llama Archivo Condicional.⁴⁶

⁴² Figura incorporada a la legislación argentina mediante la ley No. 24. 316, sancionada el 4 de mayo de 1994, promulgada el 13 de mayo de 1994 y publicada en el Boletín Oficial el 19 de mayo de 1994.-

⁴³ Artículos 280 y siguientes del Código Procesal Penal Portugués de 1987.-

⁴⁴ Ley Procesal Penal Alemana del 7 de enero de 1975, y sus modificaciones. -

⁴⁵ Artículo 1982-A de la Ley No. 1 del 3 de enero de 1995. -

⁴⁶ Artículos 27 a 29 del Código Penal de Polonia. En ese país rige el principio de legalidad, y no es sino cuando el hecho punible no tenga un grado elevado de peligrosidad para la sociedad, que se permite al Ministerio Público archivar condicionalmente el proceso, con el objetivo de resocializar al delincuente. Este archivo condicional se da por un período de uno a dos años. El Ministerio Público archivar el proceso sin el consentimiento del imputado, asimismo el juez aquellos casos en que los delitos son penados hasta por tres años. Las condiciones que debe cumplir el imputado son por ejemplo el resarcimiento del daño ocasionado, el trabajar en favor de la comunidad, el someterse a vigilancia y control por organismos sociales y colectivos a los que pertenece, pudiendo limitarse la libertad de acción y de movimiento durante el plazo de prueba. El incumplimiento de las obligaciones impuestas trae como consecuencia la continuación del proceso criminal. Véase: RODRIGUEZ GARCÍA, Nicolás, "La Justicia Penal Negociada. Experiencias de Derecho Comparado", 1ª edición, Ediciones Universidad de Salamanca, España, 1997, pp. 269-270.-

De conformidad con lo anterior no importa como se le denomine a la figura en estudio, lo fundamental es su introducción en otras legislaciones penales, al igual que la costarricense, pretendiendo solucionar la crisis del sistema penal, ocasionada por la gran cantidad de hechos delictuosos que no son resueltos de manera pronta y cumplida.-

Es mediante el cuestionamiento de las estructuras que cimientan las bases del sistema penal, que se ha logrado cambiar de esquemas, pasando de uno inquisitivo a uno acusatorio, en el que es posible priorizar los asuntos que ingresan a la vía penal, porque a los casos de pequeña criminalidad le serán aplicadas figuras alternativas, lo que deberá producir un descongestionamiento del número de asuntos que deben ir a debate, con la consecuente disminución de la utilización de los recursos económicos y humanos disponibles, tan necesaria en un país donde el Estado destina un bajo presupuesto a la administración de justicia.-

La Suspensión del Proceso a Prueba podría definirse como un mecanismo procesal que detiene el ejercicio de la acción penal en favor de una persona -imputado- quien por la comisión de un ilícito de poca gravedad, se compromete, durante un plazo determinado por ley, a reparar el daño ocasionado y cumplir satisfactoriamente con ciertas y determinadas obligaciones que éste ha consentido y que una autoridad judicial ha aprobado de acuerdo al caso concreto, a cuyo

término se declarará extinguida la acción penal, sin consecuencias jurídico-penales posteriores. Si no se cumple satisfactoriamente la prueba impuesta, el tribunal, previa audiencia dada al imputado, tiene la facultad de revocar la medida y continuar la persecución penal contra él, o puede permitir ampliar el plazo de prueba, por una única vez, en el tanto existan condiciones que permitan aplicar ese supuesto.-

Del anterior concepto, se extraen los aspectos básicos que componen la figura en estudio y que la diferencian de cualquier otro instituto alternativo, los cuales serán analizados posteriormente no solamente en lo referente a su regulación en la Ley de Justicia Penal Juvenil, sino además en el Código Procesal Penal, cuerpo legislativo que de conformidad con el artículo 9 de la ley primeramente citada, será una de las normativas aplicables, cuando no exista regulación expresa al respecto, y en ese tanto es necesario indicar que la Suspensión del Proceso a Prueba fue considerada por el legislador como una nueva forma para solucionar los conflictos penales, diferente a la tradicional -dictado de sentencia-⁴⁷ que busca

⁴⁷ “No se puede negar que estas medidas alternativas han sido vistas con simpatía, como una forma de que los participantes en el conflicto, imputado y víctima, resuelvan el mismo, en respuesta a las críticas que desde el abolicionismo se ha hecho al sistema penal, en cuanto se expropia a la víctima el conflicto, convirtiéndose éste en un conflicto no entre el autor y la víctima, sino entre el autor y el Estado. Por otro lado se trata de medidas que funcionan como alternativas de la pena, evitándose la realización del juicio oral y público, por sí solo estigmatizante, la inscripción en el registro de delincuentes de la eventual sentencia condenatoria y el eventual cumplimiento de la pena,

fundamentalmente la armonía social, así se establece en el numeral 7 del Código Procesal Penal, principio rector fundamental del nuevo proceso penal costarricense, donde la participación de los sujetos interesados, será vital para buscar no solamente terminar un proceso penal iniciado, sino para que se logre una justicia no represiva sino reparatoria, que permita la integración de la persona infractora a la sociedad.⁴⁸

B.- Requisitos necesarios para la procedencia de la Suspensión del Proceso a Prueba en la legislación costarricense:

La suspensión del proceso a prueba es un mecanismo procesal regulado no solamente en la Ley de

la que tiene especial gravedad cuando se trata de una pena privativa de libertad.” LLOBET RODRÍGUEZ, Javier, “Conciliación imputado-víctima. Reparación del daño y Estado de Derecho”, En: “Nuevo Proceso Penal y Constitución”, A.A.V.V., 1ª edición, Editorial Investigaciones Jurídicas, S.A., San José, Costa Rica, p. 208.-

⁴⁸ Sobre el particular la Sala Constitucional ha expresado: “... III.- SUSPENSION DEL PROCESO A PRUEBA.- El instituto de la suspensión del proceso a prueba se encuentra contemplado en los numerales 89 a 92 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Es una forma de extinción de la acción penal, ideada por el legislador, a fin de agilizar el sistema penal, que en la práctica, material y humanamente, no puede investigar, acusar y juzgar de manera eficiente todos los hechos que puedan constituir delito. Consiste en una solución alternativa que parte de la necesidad real de encontrar una respuesta satisfactoria para la víctima del delito y de canalizar los recursos del sistema judicial hacia la persecución de acciones que dañen en forma más grave los bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico.- ...”. Voto N° 6857-1998 de las 16:27 hrs. del día veinticuatro de setiembre del año mil novecientos noventa y ocho.-

Justicia Penal Juvenil, sino que posterior a la promulgación de ésta, se implementó en el Código Procesal Penal, con algunas diferencias que se derivan de la condición especial de los sujetos a los que se dirige, sino además por las variantes que algunas figuras poseen, como por ejemplo la suspensión condicional de la pena, cuyos supuestos de aplicación en una normativa u otra varían considerablemente, y por ello su ámbito de aplicación también es distinta cuantitativa y cualitativamente.-

B.1.- Requisitos esenciales establecidos en la Ley de Justicia Penal Juvenil:

La suspensión del proceso a prueba está regulada en la Ley de Justicia Penal Juvenil a partir de los artículos 89 a 92, y primero de los mencionados es el que establece los requisitos de aplicación a las personas menores de edad, con una edad entre 12 años a menos de 18 años. Al respecto, el artículo 89 de la Ley de Justicia Penal Juvenil establece:

“Artículo 89.- Suspensión del proceso a prueba. Resuelta la procedencia de la acusación, el Juez, “de oficio”⁴⁹ o solicitud de parte, podrá ordenar la suspensión del proceso a prueba, en todos los casos en que

⁴⁹ Mediante resolución N° 6857-98 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declaró la inconstitucionalidad de la frase “de oficio”.-

proceda la ejecución condicional de la sanción para el menor de edad.

Junto con la suspensión del proceso a prueba, el Juez podrá decretar cualquiera de las órdenes de orientación y supervisión establecidas en esta ley. Esta suspensión interrumpirá el plazo de la prescripción.”

De la anterior transcripción se deducen dos requisitos básicos que todo sujeto debe considerar al momento de solicitar a la autoridad jurisdiccional competente la aplicación de la suspensión del proceso a prueba, cuales son, primero, la existencia de una resolución que admita la procedencia de la acusación planteada por el Ministerio Público; y segundo, la posibilidad de aplicación en el caso concreto del instituto de la ejecución condicional de la sanción para el menor de edad; sin embargo, estos no son los únicos requisitos que deberán valorar los intervinientes en el proceso, porque además es necesario analizar los sujetos procesales que pueden solicitar su aplicación, y no menos importante y fundamental, la aceptación que de la aplicación del instituto haga la persona menor de edad. Los dos últimos son requisitos no establecidos de manera expresa en la legislación penal juvenil, por ello la necesidad de realizar una interpretación e integración de la normativa vigente en el país, siempre aplicando la norma en beneficio de la persona menor de edad, buscándose con ello la protección integral de aquél, el respeto de sus derechos y una formación integral en beneficio propio y de la comunidad que integra.-

B.1.1.- Procedencia de la acusación planteada por el Ministerio Público:⁵⁰

Tal requisito fue el que en primera instancia estableció el legislador en el artículo 89 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, cuyo contenido debe ser integrado con lo establecido en los numerales 68,70, 72, 73, 74, 75 y 84 de la misma normativa.-

Primero, resulta necesario mencionar que, según nuestra Ley Penal Juvenil, es el Ministerio Público el órgano que ejercerá la acción penal juvenil,⁵¹ sin perjuicio de la participación que podría tener la parte ofendida en los delitos de acción pública a instancia privada y en los de acción privada.⁵² Dicha acción dará inicio de oficio o por denuncia⁵³ interpuesta al respecto, tanto en delitos de acción pública como los

⁵⁰ Según el Tribunal de Casación Penal, en materia penal juvenil, será al momento de que se resuelva la procedencia de la acusación cuando se deba establecer la gestión para solicitar la aplicación de la Suspensión del Proceso a Prueba, sobre ello consúltese el Voto N° 666-2000 del día treinta de agosto del año dos mil.-

⁵¹ Igualmente esa facultad de ejercer la acción penal en materia de adultos está dada al Ministerio Público, según se desprende de los artículos 16 del Código Procesal Penal y los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.-

⁵² Para determinar qué debe entenderse en nuestro país por delitos de acción pública, de acción pública a instancia privada y de acción privada, el aplicador del derecho deberá remitirse a lo establecido en los artículos 17, 18 y 19 del Código Procesal Penal y a toda aquella normativa que al respecto contemple esa clasificación.-

⁵³ Véase artículo 71 de la Ley de Justicia Penal Juvenil en relación con los artículos 278 a 281 del Código Procesal Penal.-

de acción pública a instancia privada.⁵⁴ Y en tratándose de delitos de acción privada, la acción penal iniciará por demanda presentada por el interesado.^{55 56}

Con respecto a los delitos de acción pública y los delitos de acción pública a instancia privada, una vez iniciada la investigación de los hechos por parte del Ministerio Público, el Fiscal a cargo de la tramitación del expediente deberá llegar a una conclusión,⁵⁷ interesando en este caso concreto, la solicitud de apertura del proceso, mediante la formulación de una acusación,⁵⁸ que previo a ser examinada por el Juez Penal Juvenil -territorialmente

⁵⁴ Consúltese artículo 17 del Código Procesal Penal.-

⁵⁵ Véase artículos 19, 380 a 387 del Código Procesal Penal.-

⁵⁶ En todos los delitos citados, es posible solicitar la aplicación de la suspensión del proceso a prueba a favor del menor de edad acusado.-

⁵⁷ Al concluir la etapa de investigación de los hechos, el Fiscal a cargo de aquella podrá solicitar la apertura a juicio; la desestimación del proceso por no existir fundamento para promover una acusación, porque debe aplicarse un criterio de oportunidad o porque existe alguna condición objetiva o subjetiva que no permite la prosecución de la causa, o bien puede el Fiscal solicitar el dictado de un sobreseimiento definitivo o provisional, lo anterior de acuerdo con el artículo 74 de la Ley de Justicia Penal Juvenil.-

⁵⁸ Sobre los requisitos que debe cumplir una acusación en materia penal juvenil, el artículo 75 de la ley respectiva es clara en el establecimiento de los mismos, cuales son: las condiciones personales de la persona menor de edad acusada, o si las mismas se ignoran deberán consignarse alguna señal o datos con los que se le pueda identificar; la edad y domicilio del menor acusado, información que no es esencial; la relación de hechos acusados, con indicación, si es posible, del tiempo y modo de ejecución; la referencia de todas las pruebas evacuadas en la etapa de investigación; la calificación legal provisional del presunto hecho ilícito cometido, y cualquier otro dato que se considere importante.-

competente para el conocimiento de la causa-, en cuanto al cumplimiento o no de requisitos de forma y fondo, necesariamente deberá aquella serle puesta en conocimiento a la persona menor de edad acusada, para que ejerza a plenitud su derecho de defensa, a quien inmediatamente se le tomará una declaración,⁵⁹ en el término siguiente de veinticuatro horas, si aquél se encuentra detenido, y si está en libertad, la declaración podrá ser tomada en la audiencia de conciliación⁶⁰ si la misma es procedente, o bien en los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la acusación. Una vez cumplido lo anterior, el Juez deberá aceptar la procedencia de la acusación, o bien, deberá dictar un sobreseimiento, definitivo⁶¹ o provisional,⁶² según las

⁵⁹ La Ley de Justicia Penal Juvenil hace una distinción en dos grupos etarios, como se ha mencionado anteriormente, con base en esa separación la declaración del menor de edad tendrá una serie de formalidades, rígidas o no, según consta en los artículos 82 y 83.-

⁶⁰ De acuerdo al proceso penal juvenil vigente al día de hoy, concretamente a los artículos 61 a 64 y 80 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, el Juez Penal deberá señalar, cuando sea procedente, la realización de una audiencia de conciliación, en el plazo de diez días hábiles siguientes, contados a partir del momento en que se ponga a aquél en conocimiento de la acusación de los hechos, y para ello citará a las partes interesadas.-

⁶¹ Los supuestos en que procede la solicitud y el dictado de un sobreseimiento definitivo están establecidos de manera expresa en el artículo 77 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, así como las consecuencias de la misma, concretamente la extinción de la acción penal -artículo 69 de la misma normativa citada.-

⁶² También la Ley de Justicia Penal Juvenil regula los supuestos en que puede aplicarse un sobreseimiento provisional, y las consecuencias inmediatas que provocaría el dictado de la misma, así como lo que sucedería en caso de no reabrir la causa en el plazo de un año, luego de dictada la resolución.-

circunstancias del caso. Si la acusación cumple los requisitos de forma y fondo exigidos por la ley, el Juez dictará una resolución de procedencia de la acusación por existir suficientes elementos de prueba para continuar con la causa hasta una fase de juicio, para la cual se citará a las partes. Durante esa fase de juicio, las partes tendrán la posibilidad de solicitar la aplicación de la suspensión del proceso a prueba a favor del menor de edad, en el tanto se cumplen a cabalidad con los supuestos que a continuación se indicarán.-

B.1.2.- Aplicación de la ejecución condicional de la sanción para el menor de edad.-

Otro de los requisitos establecidos en el artículo 89 de la Ley de Justicia Penal Juvenil para poder aplicar la suspensión del proceso a prueba, es la procedencia en el caso concreto de la ejecución condicional de la sanción para el menor de edad,⁶³ razón por la cual es necesario remitirse al numeral 132 de aquella, la cual en forma expresa indica:

⁶³ Al respecto el Voto N° 0064-2001 de las 14:00 hrs. del día cuatro de mayo del año dos mil uno, emitido por el Tribunal Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José, menciona en importancia: "... La suspensión del proceso a prueba de conformidad con la ley especial, puede aplicarse en todos los supuestos en que procede la suspensión condicional de la pena (artículo 89 de la Ley de Justicia Penal Juvenil) en cuyo caso el Juez para acordar la suspensión de un proceso debe tomar en cuenta los esfuerzos que ha hecho el menor para reparar el daño causado, la falta de los hechos cometidos, la conveniencia para el desarrollo educativo o laboral del menor de edad, la situación familiar y social en que se desenvuelve (artículo 132 de la Ley de Justicia Penal Juvenil). ...".

“...Artículo 132.- Ejecución condicional de la sanción de internamiento. El Juez podrá ordenar la ejecución condicional de las sanciones privativas de libertad, por un período igual al doble de la sanción impuesta, tomando en cuenta los siguientes supuestos:

- a) Los esfuerzos del menor de edad por reparar el daño causado.*
- b) La falta de gravedad de los hechos cometidos.*
- c) La conveniencia para el desarrollo educativo o laboral del menor de edad.*
- d) La situación familiar y social en que se desenvuelve.*
- e) El hecho de que el menor de edad haya podido constituir, independientemente, un proyecto de vida alternativo.*

Si, durante el cumplimiento de la ejecución condicional, el menor de edad comete un nuevo delito, se le revocará la ejecución condicional y cumplirá con la sanción impuesta...”

El análisis de los supuestos mencionados, debe ser realizado por el Juez a cargo de la tramitación de la causa, considerando aspectos personales, sociales, familiares, psicológicos del menor de edad, y si bien es cierto este análisis podría ser considerado subjetivo por

lo abstracto que se vuelven algunas condiciones, máxime si se considera que en tratándose de la suspensión del proceso a prueba, aún no se ha realizado la fase de juicio, es la autoridad judicial la obligada a apoyarse en el expediente principal, considerando aspectos tales como los hechos acusados, la calificación legal dada a aquellos, la penalidad en abstracto que podría imponérsele, e incluso podría el Juzgador requerir la realización de un estudio clínico – físico, psicológico, psiquiátrico, familiar- del menor de edad, sustentando la petición de ese estudio clínico en la facultad que le da el numeral 94 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Igual enriquecimiento de la realidad que rodea al menor de edad puede lograrse con los elementos que puedan incorporar las partes en el proceso, defensor, fiscal, víctima, padres de familia, tutores, quienes con un interés de incorporar al joven a una vida normal, no deberían escatimar esfuerzos para ello.-

Es importante mencionar en este supuesto, que la regulación sobre la ejecución condicional difiere en la Ley de Justicia Penal Juvenil, con respecto a las personas adultas, según el Código Penal, como más adelante se indicará,⁶⁴ mereciendo una mención en este momento que de manera más favorecedora para los menores de edad supuestamente infractores,⁶⁵ no hay

⁶⁴ Consúltase el punto B.2.1. de la Sección Primera, Capítulo I.-

⁶⁵ Sobre el particular la jurisprudencia es clara al mencionar: “... Este Tribunal, en reiterada jurisprudencia ha sostenido que en materia penal juvenil no se limita la aplicación del instituto de la Suspensión del Proceso

limitaciones en cuanto a la penalidad del delito atribuido,⁶⁶ no es necesario que los menores muestren un arrepentimiento con respecto al hecho – supuestamente- cometido⁶⁷ y que éste tenga al momento de la condena una calidad de delincuente primario.⁶⁸ ⁶⁹. La concepción anterior debe necesariamente encontrarse en los principios rectores de la Ley de Justicia Penal Juvenil, donde la protección integral del menor de edad, su formación integral y su reinserción a la sociedad y familia es el fin último a conseguir con la aplicación de un modelo de responsabilidad hacia las personas menores de edad.-

Un aspecto necesario de resaltar en cuanto a la procedencia de la suspensión condicional de la sanción de internamiento, es el supuesto de análisis, falta de

a Prueba a ningún delito específico, tampoco es necesaria la concurrencia de todos los presupuestos que menciona la normativa, basta la concurrencia de algunos, los que resulten pertinentes para el caso concreto que se está conociendo. ..." Voto N° 0064-2001 de las 14:00 hrs. del día cuatro de mayo del año dos mil uno, emitido por el Tribunal Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José.-

⁶⁶ Ver artículo 59 del Código Penal, donde es necesario para aplicar la ejecución condicional de la pena que la pena no exceda de tres años, y consista ésta en prisión o extrañamiento.-

⁶⁷ Ver artículo 60 Código Penal.-

⁶⁸ Ibid.-

⁶⁹ Al respecto el Dr. Tiffer Sotomayor ha sostenido: "... Es importante resaltar que para el otorgamiento de la ejecución condicional de la sanción de internamiento no se ha fijado ningún límite referente a la personalidad o antecedentes de comisión de delitos anteriores, de ahí que pueda otorgarse en todo caso, independientemente del monto de la penal. ..." TIFFER SOTOMAYOR, Carlos. "Ley de Justicia Penal Juvenil. Comentada y Anotada", Ibid., p. 125.-

gravedad de los hechos, con relación al instituto de la Suspensión del Proceso a Prueba, el cual ha sido tratado por el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José, resaltando éste órgano jurisdiccional que dicho supuesto "... debe valorarse en aquellos delitos que por la naturaleza misma de la acción humana tipificada, impliquen en el agente, en su conducta, y en el resultado de la acción algún grado de fuerza o violencia. ...", ⁷⁰ siendo que en el caso concreto de concurrir esa circunstancia de gravedad, no procedería la aplicación de la medida alterna mencionada, caso contrario, al emitirse una resolución que aprueba aquella, las partes intervinientes podrían plantear un recurso de apelación, de conformidad con el numeral 112 inciso c) de la Ley de Justicia Penal Juvenil.-

B.1.3- Sujetos procesales legitimados para solicitar la aplicación de la Suspensión del Proceso a Prueba:

Sobre este requisito no hay mención expresa en la Ley de Justicia Penal Juvenil, siendo muy amplio el significado de la frase establecida en el artículo 89, "...

⁷⁰ Voto N° 190-2001 emitido a las quince horas y treinta minutos del veintitrés de octubre del año dos mil uno, por el Tribunal Penal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José. Igualmente puede consultarse el voto mencionado del Tribunal Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de San José número 0064-2001 de las 14:00 hrs. del día cuatro de mayo del año dos mil uno .-

a solicitud de parte, ...”,⁷¹ lo cual podría ser considerado un vacío a llenar por múltiples interpretaciones, pero en ese tanto resulta necesario interpretar e integrar la norma especial, en este caso concreto, con el Código Procesal Penal, artículo 25, el cual establece que el imputado, lógicamente por él mismo o a través de su defensor, podrá solicitar la aplicación de la medida alternativa. Incluso, no es alejado de la realidad, la solicitud que podría realizar un Fiscal, petición que deberá ser valorada por las demás partes, donde será en última instancia la persona menor de edad, la que valorará su oportunidad, y en caso positivo, una valoración en cuanto a su procedencia deberá ser llevada a cabo por el juez a cargo de la tramitación de la causa.-

⁷¹ Sobre el concepto de partes en el proceso penal juvenil costarricense, el Dr. Tiffer ha mencionado: “... El proceso está concebido como un proceso de partes. Con una participación importante dentro de la relación procesal se encuentran, en un primer lugar, los destinatarios de la ley, los menores de edad. ... Otro de los sujetos principales dentro de la relación procesal es el defensor del menor de edad. ... En consecuencia, del principio de justicia especializada y del principio del contradictorio, se establece en la ley la participación esencial del Ministerio Público especializado. ... El ofendido es considerado sujeto de derecho, y por ello se le concede una participación más amplia que en el proceso penal de adultos. ... Por otra parte, en el proceso penal juvenil, pueden intervenir otros sujetos, como por ejemplo los padres o representantes del acusado y del Patronato Nacional de la Infancia. ...”. TIFFER SOTOMAYOR, Carlos. “De un Derecho Tutelar a un Derecho Penal Mínimo/Garantista: Nueva Ley de Justicia Penal Juvenil.” En: Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica N° 13, Año 9, Agosto, 1997, pp. 102-103.-

B.1.4.- Aceptación del menor de edad en cuanto a la aplicación de la medida.-

Igualmente la Ley de Justicia Penal Juvenil no considera este aspecto al momento de regular la aplicación de la suspensión del proceso a prueba; sin embargo, la necesidad de dicho requisito debe ser considerado luego de emitirse la resolución número 6857-1998 por parte de la Sala Constitucional, que declaró inconstitucional la frase establecida en el numeral 89 de aquella, que refiere “...de oficio...”, negándose desde ese momento la posibilidad al Juez Penal Juvenil de aplicar por iniciativa propia y sin consulta alguna previa al menor de edad el mecanismo estudiado, por resultar contrario a las reglas del debido proceso y derecho de defensa que toda persona menor de edad imputada por la comisión de un delito o contravención tiene en un sistema penal como el nuestro, y en ese sentido merece transcribir parte de la citada resolución, la cual de manera clara establece:

“...En este aspecto, acordar de oficio la suspensión del proceso a prueba si resulta violatorio del debido proceso y específicamente del derecho de defensa; pues, pese a que las reglas de conducta que pueden imponerse como medidas no son realmente penas o sanciones; si implican una restricción de derechos, por lo que es indispensable que se exija una manifestación de voluntad de quien resulte afectado por

esas reglas de conducta; esto es, que las asuma libremente y no en forma coactiva. Por otra parte, el Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 114 inciso f) es claro al señalar que en todos los procesos administrativos o judiciales, relacionados con los derechos de los niños y adolescentes, se ha de escuchar su opinión. Razones que conllevan a estimar que la suspensión del proceso a prueba no es posible acordarla sin el consentimiento expreso del menor imputado, quien pese a que no debe necesariamente tener la iniciativa para proponer la aplicación del instituto, sí debe ser ampliamente informado sobre las consecuencias de la suspensión y obviamente debe estar de acuerdo con su aplicación. En razón de ello, procede declarar inconstitucional la frase "... de oficio..." contenida en el artículo 89 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. ... En el proceso de mayores no es posible imponer la suspensión del proceso a prueba, si el imputado no lo solicita expresamente, de manera que no podía ser más gravosa la situación del menor infractor, quien también tiene el derecho de decidir si desea o no que el proceso se suspenda. En ese sentido, procede la aplicación supletoria del Código Procesal Penal, según dispone el artículo 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Esa interpretación

resulta imperativa a la luz de lo dispuesto en el artículo 8 de la misma Ley, en cuanto a que deberá interpretarse y aplicarse en armonía con sus principios rectores, los principios generales del derecho penal, del derecho procesal penal, la doctrina y la normativa internacional en materia de menores. Asimismo, el artículo 10 establece que desde el inicio de la investigación policial y durante la tramitación del proceso judicial, a los menores de edad se les deberán respetar las garantías procesales básicas para el juzgamiento de adultos.- En consecuencia, si el menor infractor, debidamente informado y asesorado por su defensor, desea que la tramitación de la causa continúe, así debe proceder el juez, lo contrario, vulnera su derecho de defensa. ..."⁷²

Es a partir de la resolución constitucional que se transcribió, que no es posible aplicar la frase "de oficio" que establecía el artículo 89 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, lo cual viene a constituir una adecuada interpretación de los principios que rigen el proceso penal juvenil, cuales son la protección integral del menor de edad, su interés superior, el respeto a sus derechos, su formación integral y la reinserción en su familia y sociedad, a partir de los cuales no es posible considerar al menor de edad como un objeto, sino

⁷² Voto N° 6857-1998 de las 16:26 hrs. del veinticuatro de setiembre del año mil novecientos noventa y ocho de la Sala Constitucional.-

como un sujeto de derechos y obligaciones, y sobre este particular el derecho de ser escuchado es básico – lo que implica, entre otros aspectos, que opine, muestre desavenencias con lo expresado por los adultos-⁷³ que debe serle aplicado de manera igualitaria con respecto a las personas mayores de edad los derechos que poseen en un proceso penal y que le favorezcan – considerando siempre el carácter especial del proceso y de sus derechos y obligaciones-⁷⁴ y de ser informado de las consecuencias y deberes que debería asumir.⁷⁵

B.2.- Requisitos esenciales establecidos en el Código Procesal Penal para aplicar la Suspensión del Proceso a Prueba:

Como se ha expuesto anteriormente, el Código Procesal Penal al entrar en vigencia el primero de enero del año mil novecientos noventa y ocho, permitió aplicar una serie de medidas alternativas, buscando entre otros fines el agilizar los procesos penales iniciados y buscar una solución armónica de los conflictos, y entre aquellas se contempla la Suspensión del Proceso a Prueba, cuya aprobación – por parte del Juez de la Etapa Intermedia o de Juicio- debe darse a partir del cumplimiento de varios presupuestos, algunos de ellos no establecidos en materia penal juvenil, ellos son, primero, que en el

⁷³ Véase artículo 114 inciso f) del Código de la Niñez y de la Adolescencia.-

⁷⁴ Consúltase artículo 79 del Código de la Niñez y de la Adolescencia.-

⁷⁵ Al respecto el artículo 20 del Código de la Niñez y de la Adolescencia.-

asunto que está siendo juzgado es posible la aplicación del beneficio de ejecución condicional de la pena; segundo, que el imputado acepta libre y conscientemente los hechos acusados; tercero, el hecho de que la solicitud debe ir acompañada de un plan de reparación que busque compensar o indemnizar el daño causado como producto de su conducta ilícita, proyecto que puede ser natural o simbólica o bien consistir en una conciliación con la víctima, cuarto, un detalle de las condiciones que estaría dispuesto a cumplir a fin de reintegrarse a la sociedad, y quinto, que el imputado no se haya beneficiado en los cinco años anteriores a la solicitud, de la aprobación de la Suspensión del Proceso a Prueba o bien de la extinción de la acción penal por reparación integral de los hechos. Si se llegase a cumplir lo anterior, la petición del imputado o del Ministerio Público debe ser expuesta ante la autoridad judicial competente, la que en última instancia, decidirá si existen elementos necesarios para dar el visto bueno a la solicitud planteada, o si bien deben realizarse modificaciones al plan o condiciones, o en el peor de los casos si se deniega la gestión.-

B.2.1.- Casos en que procede la suspensión condicional de la pena:

La Suspensión del Proceso a Prueba en materia penal de adultos se aplica en los casos en que procede la suspensión condicional de la pena -presupuestos diferentes a los establecidos en la Ley de Justicia Penal Juvenil- sin tomar en cuenta si el delito es de acción